



LA POLITICA DE AJUSTE Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL

ENZO DEL BUFALO

En el país de cucaña

A finales de 1988, el agotamiento del modelo sustentado en la renta petrolera como motor de una economía de consumo y no productiva era una realidad evidente que, en aquellos meses finales del régimen de Lusinchi, se había transformado de una mera constatación intelectual en una agobiante sensación de impasse interminable. El sucederse de los escándalos, la arrogante actitud de un sector privilegiado parecían caer en un mar de condescendiente permisividad y pasividad de la mayoría de la población. Venezuela se había convertido en un país donde nunca pasaba nada y condenado a vivir en un estancamiento permanente, sostenido artificialmente por la tradicional política de subsidios estatales para aliviar las tensiones sociales y evitar el colapso. Después de todo, este sistema había asegurado treinta años de democracia en un continente donde los demás países habían tenido que recurrir a la dictadura militar para mantener la cohesión social.

Además, aunque muy disminuida, la renta petrolera era aún relativamente elevada. El gobierno de Lusinchi, en un esfuerzo supremo por mantener esta línea de conducta, exacerbó tanto los viejos vicios de la corrupción y la mala administración que termino raspando la olla. La fase final de su gobierno fue el gran coletazo del pez moribundo. Había pues que hacer algo, ¿pero qué? Lusinchi recuerda en más de un aspecto al rey de Francia Luis XV que, siguiendo el dicho de su bisabuelo **“après moi dé luge”**, llevó

al agotamiento el **ancien régime** y luego le dejó a su sucesor, el pobre de Luis XVI, la tarea de deshacer el entuerto. Este pobre diablo quiso corregir el rumbo, pero lo hizo mal y al final le regaló a la humanidad la Revolución Francesa.

El nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez se encontró, pues, con una situación parecida a la de Luis XVI y cada día se le parece más. Habiendo sido el presidente de la época de auge del viejo modelo rentista, hombre totalmente consustanciado por formación política con la mentalidad populista era quizás la persona menos adecuada para ofrecer una alternativa. Pero su agudo olfato político le decía, ya desde los días cuando era candidato que había que hacer algo y lo mejor era dejarse guiar por los nuevos vientos que soplaban desde los grandes centros de poder y confiar en la habilidad técnica de los jóvenes y no tan jóvenes economistas que sí sabían qué hacer, ahora que, iluminados por la verdad neoclásica, habían abjurado de antiguos errores populistas y vicios subversivos. Al fin y al cabo había sido su programa del Gran Mariscal de Ayacucho el que había creado esta nueva casta de intelectuales bravíos.

Por su parte, los economistas y otros intelectuales venían hablando del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones desde los años setenta y la necesidad de una reestructuración profunda de la economía y sociedad venezolana. Claro está que entonces se hablaba en términos distintos. Se decía, por ejemplo, que la plusvalía petrolera ya no era suficiente para sustentar la acumulación del capital y que éste debía empezar a producir plusvalía sustentada en la explotación de la fuerza doméstica. Un lenguaje quizás poco científico e inapropiado, pero que en esencia apuntaba al hecho de que la economía venezolana dependía casi exclusivamente del petróleo.

La industrialización sustitutiva se convirtió, en gran parte, en una forma de comercialización disfrazada para mejor usufructuar las distintas formas de repartir la renta petrolera que tenía el Estado. Los subsidios a la inversión le permitía a cada inversionista capitalizar varios bolívares provenientes del Estado por cada uno aportado por él y, además, obtener beneficios monopólicos derivados de un mercado vuelto cautivo por la política expresa del Estado. Para este tipo de industrialización no se requería una verdadera

mentalidad empresarial dispuesta a asumir riesgos y a desarrollar una capacidad tecnológica para poder competir abiertamente. Más bien era necesario tener buenos contactos en los lugares apropiados y ser hábil gestor frente al gobierno.

Para sostener una demanda interna suficientemente elevada para este sector industrial en crecimiento, el Estado repartía parte de la renta petrolero al resto de la población -aunque en forma desigual- mediante un sistema de precios controlado con subsidios directos e indirectos y manteniendo una burocracia abundante y relativamente bien pagada. Un país de cucaña donde el esfuerzo iba dirigido a recolectar la riqueza proveniente del subsuelo, arrebatándole al “competidor” lo más posible.

Al principio, cuando comenzó este régimen, el país era pequeño y la renta petrolera relativamente grande, luego el país creció y la renta se hizo exorbitante; tanto, que a mitad de los años setenta llegó a tener la sensación de que Venezuela estaba próximo a ingresar al club de los países ricos. Pero desde 1979, la inversión privada empezó a decrecer y la economía se estancó sin que el nuevo aumento de los precios del petróleo pudiera remediar la situación de la economía real no petrolera. Por el contrario, los nuevos ingresos cayeron sobre el país como el diluvio que terminó por anegar las esperanzas del país de Cucaña.

Lo bueno y lo malo del Paquete

En 1989 el modelo económico venezolano no sólo estaba agotado en términos estructurales, sino también en términos operativos. La situación de la balanza de pagos y de la administración pública obligaban a recurrir a los organismos internacionales para poder seguir operando. De manera que seguramente se consideró que sería un hábil maniobra política ligar los cambios estructurales que necesitaba la economía al programa de ajuste macroeconómico que exigía el FMI. Y en efecto, un gobierno cuya plataforma política se sustentaba en las organizaciones populistas y en el clientelismo empresarial tradicional necesitaba convencer a su

base política de que estaba obligado por fuerzas mayores a llevar a cabo una política contraria a sus intereses inmediatos. El FMI se convertía así en el mítico poder externo para contrabalancear los intereses creados en el país. Por otra parte, esta nueva alianza con el otrora detestado hambreador de los pueblos se justificaba frente al gran público con la excusa de que los corruptos habían dejado en la quiebra al país.

Este subterfugio político era quizás la única manera -improvisada de acuerdo a las circunstancias del momento, como suelen ser todas las políticas venezolanas- para poder iniciar un proceso de cambios que eran ya impostergables y para los cuales no había habido la necesaria configuración previa de un conjunto de fuerzas políticas que, habiéndole dado al nuevo gobierno un mandato en ese sentido, constituyeran también su piso político. Por el contrario, gran parte de la adhesión política que devolvió a Carlos Andrés Pérez a Miraflores soñaba, o con un retorno a los setenta o, cuando menos, con una continuación del estilo anterior.

Esta urgencia política del nuevo gobierno, sin embargo, ocasionó dos tipos de asociaciones de ideas en la mente de los venezolanos: una positiva y otra negativa. Con la primera se logró un cambio importantísimo en la conducta social. La gente aceptó el hecho de que la corrupción había dejado al país al borde de la quiebra. Desde la época de Lusinchi, la larga polémica para la renegociación de la deuda y los escándalos de los corruptos del gobierno de Luis Herrera había puesto el tema de la corrupción y la mala administración en correlación con el fin de la época de bonanza. Pero ahora, el escándalo de RECADI, que abarcaba prácticamente la totalidad de la clase dirigente, y todos los sacrificios que se le pedían a la población para superar sus consecuencias, terminaron por convencerla de que la corrupción era la primerísima causa del deterioro de su nivel de vida.

Este es un hecho de una gran significación histórica. Marca el fin de la cultura patrimonial heredada de la colonia y hace entrar a la sociedad venezolana en el mundo de la modernidad con su tajante división entre lo público y lo privado, que es una condición indispensable para construir una administración pública eficiente. La valoración positiva del "vivo" desaparece y aparece la idea de que la defensa de la cosa pública es también una forma de defender

el interés propio. Se consolida en la mente de los ciudadanos la ecuación: corrupción administrativa igual a carestía de la vida. Por haber logrado esto -sin proponérselo- el famoso paquete merece el mayor reconocimiento y será señalado por la historia.

Sin embargo, la segunda asociación de ideas ha sido perjudicial. El paquete de medidas económicas, con su doble intención de satisfacer las exigencias de los organismos internacionales e iniciar al mismo tiempo la reestructuración de la economía venezolana, mezcló una mala política de corto plazo con las buenas intenciones. Los cambios estructurales de la economía venezolana se acoplaron a los ajustes macroeconómicos, haciendo creer que aquéllos dependían necesariamente de éstos. Fue un verdadero desastre hacerle creer a la gente que la reducción drástica de sus niveles de ingreso, la redistribución regresiva y la inflación desbordada, era la única forma de lograr una economía abierta e independiente del petróleo. Y, peor aún, insistir en que estas medidas, acompañadas por la desregularización eran por sí solas suficientes para el desarrollo del país. La prédica era que las medidas iban a crear una “economía de mercado” y el mercado -libre ahora del yugo estatal- haría el resto produciendo bienes y riquezas para todos. La demagogia política estableció una nueva ecuación: el paquete es igual al mercado, que es igual a la prosperidad económica de Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea. Oponerse a él es querer regresar al pasado, que es igual al estatismo populista, que es igual a la miseria y el desastre económico del comunismo soviético del Tercer Mundo. Un potpourri ideológico efectista diseñado más para intimidar, dados los tiempos que corren, que para convencer?

Esta disyuntiva dogmática pesaba como espada de Damocles contra cualquiera que quisiera hacer algunas observaciones al paquete, sin por ello sentirse un nostálgico del ancienne regime venezolano o, si al caso vamos, por el soviético. Este dogma ha calado tanto en la gente común que incluso, las actuales exigencias de modificar el paquete se basan en consideraciones de oportunismo político o humanitarias, dando por descontado implícitamente de que son eficaces del punto de vista económico. Pero en verdad, **entre las medidas de ajuste y los cambios estructurales no hay continuidad: las primeras no llevan necesariamente a las**

segundas y viceversa, el paquete del FMI no es ni indispensable ni eficaz para lograr cambios estructurales.

En su origen, las medidas de ajuste macroeconómico del FMI no fueron diseñadas para llevar a cabo cambios estructurales en las economías, ni siquiera se proponían lograr el crecimiento sostenido. Ambos propósitos son añadidos de última hora cuando empezó la moda monetarista y los organismos internacionales se convirtieron en entes supranacionales para regular las economías de los países con problemas. Su verdadero propósito fue siempre el de lograr saldos positivos en la balanza de pagos y asegurar así la solvencia internacional de los países miembros del sistema, que para eso se había creado el FMI. El objetivo típico de todo acreedor es el asegurarse de que el deudor le pague. En los años setenta, con el fin del sistema de paridades fijas, los organismos internacionales asumieron también la defensa de tesis tales como el tipo de cambio flexible y el resto del recetario neoclásico. Más tarde, con el arriar de los vientos del conservadurismo, empezaron conjuntamente con el coro académico oficial, a recomendar y, a veces, a imponer a los países débiles, políticas de los países más poderosos jamás han seguido. Todo esto en nombre de una mítica “economía de mercado”.

En su verdadera esencia las políticas de ajuste buscan garantizar que el país deudor logre la solvencia necesaria para pagar sus deudas y desde esta perspectiva tales políticas son indiscutiblemente eficaces. Pero este propósito no tiene nada que ver con el hecho de que para alcanzar este objetivo, aumente la pobreza relativa y la redistribución regresiva del ingreso del país que las aplica. De manera que el querer convertir al FMI y su receta en un consejero de desarrollo económico es un **non sequitur**.

Pero si la función del FMI no es desarrollar la economía, tampoco la política de corte neoliberal en general logra el crecimiento económico, como lo muestra el caso evidentísimo de los Estados Unidos durante toda la década pasada hasta el presente. De manera, pues, que ni los objetivos de los organismos internacionales ni la experiencia política de algunos países que con tanta alharaca inauguraron la década de los ochenta con el nuevo evangelio neoliberal, pueden aportar elementos a favor de su eficacia para el

cambio estructural. Estados Unidos e Inglaterra son hoy en día economías estancadas con una mayor desigualdad social que hace una década. Es necesario, pues, comprender que la política de ajuste macroeconómico es una cosa distinta a una estrategia de cambio estructural de la economía venezolana y que la primera ha obstaculizado, cuando no comprometido, el éxito de la segunda.

La mecánica de la política de ajuste.

Después de tres años de aplicación de las medidas económicas no tiene sentido hacer una exposición de posibles alternativas a la política de ajuste escogida por el gobierno. Sin embargo, sí cabe mostrar el sesgo en contra de la producción real que tienen tales medidas y cómo va en contra de los propósitos de una reestructuración de la Economía venezolana que la haga menos dependiente del petróleo. Veamos pues qué se ha logrado en este sentido.

La actual política de ajuste ha sido indiscutiblemente exitosa en mejorar la situación de la balanza de pagos que, como dijimos, siempre ha sido su verdadero objetivo. Hay que reconocer también que la estructura de precios -por largo tiempo distorsionada por la política de sustitución de importaciones- ahora se ajusta mejor a los costos reales de producción del aparato productivo venezolano. Claro está que al decir esto, estamos dejando de lado toda consideración sobre la organización monopólica prevaleciente en la mayoría de las actividades económicas y la especulación inflacionaria que tal organización genera. La estructura de precios se ve mejorada también por la caída de las barreras arancelarias, aunque sus beneficios son mucho más limitados de los que los actuales ideólogos del gobierno nos quieren hacer creer, por razones que no podemos entrar a considerar aquí. Ciertamente con estas medidas se ha roto definitivamente el sistema asfixiante y sobreprotector instaurado con la política de sustitución de importaciones y marca el fin de la era del empresario como simple gestor frente al gobierno.

Estos objetivos se ganaron, sin embargo, a costa de establecer **una relación perversa entre tipo de cambio, inflación,**

tasa de interés y gasto público, lo cual ha deprimido innecesariamente la actividad económica, instaurado una inflación estructural antes desconocida en Venezuela y vuelto más rígida la presión sobre el gasto fiscal En esto los actuales ideólogos económicos han demostrado un desconocimiento o un desinterés no sólo por la teoría económica, sino sobre todo por las características estructurales de la economía venezolana, prefiriendo aplicar recetas que son cuestionables incluso en aquellas economías que tienen una estructura más cercana a la que supone la teoría en la cual se sustentan.

La drástica devaluación y el mantenimiento de un tipo de cambio supuestamente de mercado libre no podía sino generar una fuerte presión inflacionaria en una economía tan dependiente de los insumos importados y, además, reforzar la tendencia estructural de la economía venezolana a un incremento de la demanda de divisas. Para frenar esta última, hubo que elevar las tasas de interés a niveles tan altos que hicieron colapsar la demanda de consumo inerna así como los rendimientos esperados por los potenciales inversionistas. Esta combinación de altas tasas de interés y bajos rendimientos esperados, hizo que la poca propensión a invertir desapareciera del todo seguida de una fuerte contracción del producto interno, más del ocho por ciento en el primer año. El ahorro se orientó entonces exclusivamente a la especulación financiera presionando el alza del tipo de cambio y obligando a mantener tasas de interés demasiado elevadas con relación a las necesarias para estimular la producción. Es obvio que este mecanismo desvía permanentemente hacia la especulación financiera todo el ahorro que en condiciones normales se orientaría, por lo menos en parte, hacia la actividad productiva.

Este mecanismo se instauró en una economía que depende en un 95% de un producto primario para sus divisas y que tiene un aparato productivo muy dependiente de las importaciones de insumos. Una economía que, por lo tanto, tiende **estructuralmente** a la devaluación de su signo monetario con independencia de los estados transitorios de las cuentas externas. En otras palabras -de las teorías neoclásicas- podemos afirmar que en Venezuela existe un solo recurso escaso: las divisas. A esta estructura, la política de ajuste yuxtapuso el ya mencionado mecanismo que desvía recursos de la producción, añadiendo más presión sobre la demanda de

divisas.

Ahora bien, para mantener esta ficción de un mercado libre de divisas, se necesita una política monetaria restrictiva que drene permanentemente recursos de la demanda potencial de divisas. Con ello, no sólo se refuerza el sesgo antiproductivo, sino que, además, el Estado debe embarcarse en una política muy costosa, como lo muestran los miles y miles de millones gastados para pagar los intereses de los bonos cero cupón. Una política absurda -desde el punto de vista del crecimiento real- que hace aún más regresiva la distribución del ingreso, aumenta el diferencial entre colocaciones y depósitos de los bancos, haciéndolos más ineficientes y alejándolos aún más de crédito productivo. Una política de ajuste que genera recesión por un lado y exceso de liquidez por el otro. Como se ve, es un mecanismo perfecto para concentrar los pocos recursos disponibles de una economía, en una forma tal que pueda servir de pago de las obligaciones internacionales.

Pero este no es todo el costo que la economía debe pagar para tener un tipo de cambio de mercado. Debido a que todo el mecanismo estanca la economía, reduce el producto nacional y aumenta la concentración regresiva del ingreso, se convierte en un gran estimulador de las presiones por los reclamos sobre el producto real las cuales, a su vez, inciden sobre la inflación y el gasto público. Y esto precisamente en un país que ya al iniciarse este proceso de ajuste mostraba grandes desequilibrios a este respecto y que, por lo tanto, tenía un margen de tolerancia social muy bajo. Ciertamente incomparablemente más bajo que de cualquier país desarrollado donde, por lo demás, jamás se ha aplicado un ajuste tan drástico.

Contrariamente a lo que cree y predica la vulgata económica, el exceso de dinero no es **causa** de la inflación, sino tan sólo su sintoma, como la fiebre lo es de la gripe. Es cierto que las restricciones en la cantidad de dinero comprimen la presión inflacionaria al hacer más escaso el instrumento mediante el cual los distintos actores tratan de hacer valer sus reclamos de ingreso sobre los de los otros. La tasa de interés, como cualquier otro reclamo distributivo, es tendencialmente inflacionaria. Por lo tanto, cuando la política monetaria eleva la tasa de interés para represar los ahorros en el sistema financiero y luego drenarlos hacia el Banco Central, reduce, es cierto, la cantidad de dinero en manos del

público, pero al mismo tiempo incrementa el reclamo sobre el ingreso real de los ahorristas y del sector financiero. Esto afecta los costos nominales de las empresas y el poder adquisitivo de los consumidores. Si la estructura de precios es monopólica, las empresas podrán aumentar el marcaje (markup) sobre los costos primos para compensar los mayores intereses, reduciendo aún más el poder adquisitivo de los consumidores.

Una economía donde el marcaje (beneficios brutos incluyendo los intereses) sobre los costos primos se mantiene o aumenta cuando la actividad se estanca, tiene incorporada una propensión estructural a la inflación que solamente puede ser aliviada mediante una reducción de los salarios. Ahora bien, en la economía moderna es muy difícil que los salarios nominales se reduzcan y ciertamente imposible que lo hagan mientras los precios suben. Por el contrario, la transferencia de otras presiones inflacionarias a los precios estimula también los reclamos salariales que de no ser compensados con un aumento de la productividad, se convertirán en un mayor nivel de precios. Así pues, **cualquier incremento de un reclamo (no sólo de los salarios) sobre el ingreso real que no sea compensado por una reducción igual de otro reclamo o por un aumento proporcional de la productividad produce necesariamente una inflación de los precios.**

En tales circunstancias, la reducción de la cantidad de dinero puede no ser suficiente a menos que se lleve a unos niveles muy grandes que podrían bloquear todo el sistema económico. La única otra posibilidad es recurrir a métodos extraeconómicos para obligar a un sector a reducir sus reclamos a favor de otros. Pero estos métodos de coerción abierta son de disponibilidad limitada en un sistema democrático, donde debe recurrirse prevalentemente al poder de mercado para decidir qué sectores prevalecen y cuáles sucumben.

Pero en una sociedad democrática, las tensiones sociales por los reclamos distributivos no sólo se manifestarán en el síntoma de la inflación, sino que, además, se reflejarán también y necesariamente en el gasto del gobierno. En primer lugar, el aumento de precios aumenta automáticamente los gastos nominales del gobierno en todos aquellos casos en que existan compromisos previamente establecidos e inmodificables desde el punto de vista

operativo. En segundo lugar, debe atender a inevitables aumentos de sueldos de sus dependientes y aunque estos aumentos no constituyan más que una compensación parcial de la pérdida de sus ingresos reales, el aumento para el Estado será en una proporción tanto mayor cuanto mayor sea la tasa de inflación existente. En tercer lugar, mientras más precario sea el nivel de vida y la distribución de ingreso inicial, y cuanto más drástica sea la recesión y la redistribución adicional del ingreso provocados por el ajuste, tanto mayor será la carga social que debe asumir el Estado para mantener el equilibrio social. Así pues, **existe una estricta correlación entre la política de ajuste recesiva y el incremento de la proporción rígida del gasto fiscal y de su monto total nominal.** no deja de ser asombroso que sean los mismos proponentes del actual mecanismo de ajuste los que más se quejan del gasto fiscal.

Al igual que el de los demás agentes económicos, el ingreso fiscal constituyen un derecho de reclamo sobre el producto real. Por lo tanto, los impuestos (como los beneficios, tasas de interés, salarios, etc.) pueden, en principio, ser inflacionarios por los mismos motivos expuestos arriba. Ocurre, sin embargo, que en el caso venezolano tan sólo el 20% o el 30% del gasto fiscal se financia con reclamos sobre el producto interno no petrolero. De manera que se da la curiosa circunstancia de que -desde esta perspectiva por lo menos- el gasto fiscal venezolano no debería incidir significativamente sobre la inflación. Precisamente la estructura impositiva venezolana muestra que el Estado no ha tenido nunca reclamos significativos sobre el producto nacional y, por lo tanto, podríamos concluir que es esencialmente no inflacionaria. Después de todo siempre se ha sabido que el modelo rentista se basa precisamente en una transferencia de recursos del Estado a la economía no petrolera. Sin embargo, debemos tener cuidado con las aplicaciones demasiado lineales de razonamiento teóricos. En efecto, el 80% del gasto fiscal que es financiado con los ingresos petroleros puede ser inflacionario porque de hecho representa un reclamo adicional sobre el excedente del producto interno no petrolero y compite con los reclamos de producto interno no petrolero y compite con los reclamos de otros sectores.

En principio, ese reclamo del Estado se debería dirigir a la

economía mundial que es donde se origina por la venta del petróleo. Si el Estado gastara sus dólares en el exterior no debería afectarse la economía nacional. Pero entonces los otros sectores de la economía doméstica no podrían tener acceso a esos dólares, ya sea por prohibición expresa o si se mantuviese el mercado abierto de divisas por la ausencia de la oferta del Estado.

En tales circunstancias, la escasez de divisas provocaría una devaluación drástica del tipo de cambio llevándola a su verdadero valor de mercado-determinado por la oferta y la demanda de divisas generadas por la economía no petrolera exclusivamente, pero exacerbando la inflación interna. De este modo aparecería claro para todos la verdadera naturaleza del problema. **una de dos; o es el Estado el que gasta un dinero que no representan un derecho efectivo sobre producto nacional, o son los otros sectores que compran dólares con un dinero que no tiene un derecho efectivo sobre el producto mundial.** La pretensión de sostener concomitantemente ambos derechos constituye un conflicto de reclamos de ingreso real que es ciertamente inflacionario. En otras palabras, el gasto fiscal sólo es inflacionario si excede la capacidad de compra real dejada libre por el sector privado de la economía. Lo que aparece como un gasto inflacionario no es más que el espejismo de un sector doméstico ineficiente que tiene un reclamo excesivo sobre la parte del producto mundial sobre el que el petróleo genera un derecho.

En vez de ver que el Estado gasta demasiado dinero para adquirir los pocos bienes y servicios nacionales, generando inflación según la sabiduría convencional, vemos que es el sector doméstico el que demanda demasiados dólares a cambio de los cuales no ofrece una contrapartida real en términos internacionales. No es el gasto del Estado el inflacionario, sino la transferencia de dólares - a través del mercado libre- al sector doméstico sin contrapartida real.

Este razonamiento es más consistente con el hecho de que existe una capacidad ociosa doméstica considerable, un exceso de liquidez y desempleo. Pues si el gasto fiscal genera inflación porque inyecta demasiados bolívares en la economía doméstica para los cuales no hay bienes y servicios ¿por qué, entonces, hay una

capacidad productiva ociosa mayor del 35% y tanto desempleo? El exceso de liquidez aparentemente generado por el gasto del gobierno, es generado más bien cuando se venden dólares a cambio de unos bolívares en poder del sector doméstico que no tienen respaldo en la producción real doméstica. Se dice que el Estado devalúa para obtener más bolívares para sus gastos, pero cabe la pregunta ¿si el Estado no vendiera sus dólares al tipo de cambio vigente, dónde podría comprarlos el sector doméstico? ¿Cuál es el tipo de cambio real de la economía doméstica no petrolera con la economía mundial? Respecto a este tipo de cambio? el bolívar está sobrevaluado o subvaluado? ¿si el Estado no subsidiara la economía doméstica a través del mercado libre de divisas, ¿seguiría produciendo exceso de liquidez? Este exceso no se genera en verdad cuando el Estado por sus dólares petroleros recibe unos bolívares que no tienen respaldo de bienes y servicios domésticos. Los dólares del Estado son buenos y tienen un poder de compra internacional como cualquier otro dólar, pero los bolívares que recibe no tienen el mismo poder de compra porque en el fondo no representan ninguna cantidad de bienes y servicios transables en el mercado mundial.

Visto así el problema del gasto fiscal, sacamos dos conclusiones: a) es el sector doméstico el causante estructural de la inflación atribuida al gasto fiscal y b) el Estado, al mantener esta política de gasto combinada con un mercado de divisas libres y una estructura impositiva menguada, sigue alimentando una economía parasitaria que además se hace cada vez más regresiva. El ajuste está generando un nuevo populismo de élite.

Hacia la reestructuración de la economía

Al margen de las objeciones que se le puedan hacer con relación a los equilibrios macroeconómicos, la política de ajuste ha sido mala principalmente porque **refuerza el carácter parasitario de la economía doméstica en lugar de estimular su reestructuración**. Los razonamientos anteriores pretenden explicar este hecho el cual puede ser constatado por todos en sus aspectos fenoménicos tales como la mayor participación de la renta petrolera en el presupuesto, la caída de las exportaciones no tradicionales y

el incremento de las importaciones, el exceso de liquidez permanente acompañado de un fuerte desempleo de los factores productivos, un tipo de cambio bajo el formalismo del mercado es en realidad una concentración y potenciación de la tradicional política de subsidios del Estado rentista a una economía doméstica preponderantemente ineficiente y parasitaria. Este mismo Estado se ha visto obligado, además, a continuar con la tradicional política cíclica electoral de las administraciones democráticas: dos años de contracción para reajustar y tres años de expansión presupuestaria. Lo cual demuestra una mala conciencia política para seguir incluso la fe neoliberal que profesa.

Si en verdad el ajuste fuese un preámbulo necesario para la reestructuración de la economía, entonces debería perseguirse la liberación total del mercado, retirando todo tipo de subsidios al sector doméstico incluyendo el de las divisas. Para ello sería necesario también una reforma tributaria profunda, así como la reforma financiera y administrativa y luego dejar que el mercado siguiera su curso bajando el nivel de salarios, hasta el punto en que sea más rentable producir bienes en Venezuela que en el exterior, tal como lo dice la teoría neoclásica, la cual, por supuesto, no contempla situaciones como el 27 de febrero, ni golpes de Estado, ni cacerolazos.

Es una incongruencia del gobierno, por lo tanto, tratar de que la economía crezca mediante la expansión del gasto fiscal, cuando debería estar reduciéndolo drásticamente en la misma proporción en que transfiere su ingreso real petrolero al sector doméstico vía tipo de cambio. Claro que con esta incongruencia el Estado y sus ministros muestran tener más sentido de realidad que los teóricos puros cuyas prédicas admiran. Toda esta charada nos recuerda una vez más que la teoría económica, si quiere servir para algo, debe dejar de ser un simple parloteo formalizado sobre variables y regresar a ser economía política donde las variables económicas son siempre expresión de relaciones sociales de poder.

El gobierno, después de haber aplicado sus políticas de ajuste y haber hecho algunas reformas a medias, ha centrado toda su estrategia de reestructuración de la economía en la esperanza de que el mercado -ahora libre del intervencionismo estatizante- defina sí solo el desarrollo industrial, agrícola y del resto del aparato productivo, integrándolo al mercado mundial. Pero incluso los defensores de esta postura reconocen que esto ocurre en el largo plazo. Quizás en ningún

caso como ahora tiene vigencia en Venezuela al célebre frase de Keynes: “en el largo plazo todos estamos muertos”.

Es extremadamente difícil llevar a cabo una estrategia de reestructuración económica tan profunda como la que exige Venezuela, si se empieza por reducir tan drásticamente el nivel de vida de la población y, además, se propicia una redistribución regresiva del ingreso, concentrándolo aún más de lo que estwaba. De manera que el primer correctivo para salir de este atolladero, debe ser el restablecimiento de un nivel de vida mínimo aceptable y una distribución menos regresiva del ingreso que sirva de base para una demanda doméstica privada suficiente para el crecimiento sostenido. Esto puede lograrse reduciendo el actual subsidio al sector financiero y especulativo de la economía doméstica que llega a través de la actual política monetaria y del tipo de cambio.

El control del tipo de cambio es lo más efectivo y rápido, pero el contexto social no lo hace viable por todos los problemas vinculados con la ineficiencia administrativa y la corrupción. Una alternativa es un a reforma tributaria drástica que llegue a financiar en poco tiempo el 80% del presupuesto y libere los recursos petroleros para programas de inversión en el sector productivo, y estimule la inversión privada mediante programas de capitales de riesgo y otras modalidades para evitar que las nuevas inversiones se conviertan en una ampliación del sector público o que se repita la desastrosa experiencia de la Corporación Venezolana de Fomento. Esto exige también una reforma de todo el sistema financiero para convertir a la banca en un proveedor de fondos para la inversión real, en lugar de detractor neto de esos recursos.

Pero ninguna estrategia económica será exitosa, por bien fundamentada que esté, a menos que se lleve a cabo una profunda transformación en la conducta social y política del país que acabe con la mentalidad patrimonialista que está en la base de la corrupción, que elimine el empresario gestor herencia de la sustitución de importaciones, y lo reemplace con un empresario auténticamente emprendedor que asuma riesgos y se conforme con niveles de ganancias suficientes para una acumulación según el patrón de los países desarrollados, que tenga, pues, una visión extensiva y no intensiva y cortoplacista del mercado. Todo esto raya en la revolución social y exige la presencia de nuevos sujetos políticos.

